



Buenos Aires, 4 de mayo de 2012

RES. N° 250 /2012

VISTO:

El estado del concurso nro. 43/10, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la presentación que tramita por actuación nro. 07739/12, la concursante Dra. Carolina Spósito, impugna la calificación obtenida por sus antecedentes personales, examen oral y escrito y entrevista personal en el mencionado concurso, convocado para cubrir cargos de defensores ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Que sostiene la impugnante respecto de su evaluación escrita que considera haber desarrollado la mayoría de las pautas de ponderación y no encuentran presentes los presupuestos valorados negativamente, motivo por el cual la impugnante no advierte la razón que su nota resulte inferior comparada a la de otros concursantes. Se la calificó con 34 puntos

Que, asimismo, respecto de su examen oral realiza una crítica sobre la organización del concurso y la supuesta afectación a los concursantes que rindieron en la primera jornada, para luego señalar que la calificación global asignada a la exposición oral ha omitido valorar positivamente ciertos pasajes relevantes para su calificación. Se le asignaron 33 puntos.

Que la evaluación técnica de los concursantes, a través de las pruebas escrita y oral, ha sido realizada por un jurado de especialistas en las materias que son de competencia del cargo que se concursaba. Sus miembros han sido designados por sorteo entre los integrantes de las nóminas de expertos en cada especialidad propuestos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las facultades de derecho con asiento en la Ciudad, y los integrantes de la magistratura. En tales condiciones, puede afirmarse que el mecanismo de designación y el origen de las propuestas constituyen una garantía acerca de la ecuanimidad del cuerpo y la aptitud profesional de sus integrantes.

Que, asimismo, los criterios de valoración consensuados por el jurado del concurso respecto del examen escrito (art. 29 del Reglamento) que luce en que luce en fs. 455 a 498 del tercer cuerpo, del expte. N° SCS-033/10-0 constituyen un marco adecuado para la evaluación que se llevó a cabo, por lo que la Comisión de Selección considera que otorgan un razonable sustento a la decisión adoptada.

Que en ese orden de ideas las impugnaciones deben demostrar la existencia de omisiones o errores graves o arbitrariedad en la calificación asignada. En tal sentido no son idóneas para modificar la decisión recurrida las que sólo exhiben la discrepancia del impugnante con el puntaje otorgado, que de tal modo resultan insuficientes para conmover lo resuelto.

Que la Comisión de Selección ha analizado detalladamente tanto la presentación del concursante como así también su examen escrito, la videofilmación de la prueba oral y la opinión del jurado, por lo que objetivamente no puede desconocerse que siendo una cuestión opinable, en la misma se han expedido expertos técnicos de incuestionable conocimiento de la materia.

Que en consecuencia, a juicio de la Comisión de Selección y sin perjuicio del acierto o desacierto de la solución del caso objeto del examen, los argumentos desplegados en la prueba escrita y el desempeño en la prueba oral han sido adecuadamente evaluados por el jurado, sin que el impugnante demuestre la configuración de alguno de los supuestos a que se subordina el progreso de la impugnación. En tal sentido, el contenido de la protesta sólo revela la disconformidad del concursante con la calificación asignada, sin armar razones que conmuevan la decisión recurrida.

Que, en cuanto a la valoración de sus antecedentes, se agravia la impugnante por el puntaje obtenido por antecedentes profesionales. Manifiesta que ha sido calificada con 12 puntos por su cargo de prosecretaria administrativa de la Defensoría PCyF N° 11, y que se ha omitido valorar que desde el 01/02/2011 ha sido asignada prosecretaria coadyuvante en la misma defensoría hasta el 02/11/2011 que fue designada secretaria interina de la misma dependencia. Solicita se le otorgue el mismo puntaje que a los secretarios interinos, a quienes nombra uno por uno.

Que, al respecto, no le asiste razón, por cuanto ninguno de los dos cargos los acreditó en su legajo con anterioridad a la fecha fijada para el examen escrito, conforme lo establece el reglamento vigente. La impugnante actualizó su legajo en marzo de 2012. Sin embargo, el cargo de secretario no se hubiera valorado tampoco, toda vez que el nombramiento fue posterior a la fecha del escrito.

Que, afirma se ha pasado por alto el cargo de auxiliar letrada que desempeñó en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, por un período de una año y nueve meses, lo que acredita en su legajo. Solicita se le adicionen 6 puntos en los antecedentes profesionales.

Que, al respecto, tampoco le asiste razón a la impugnante, puesto que el cargo de auxiliar letrada no se equipara funcional ni salarialmente al de secretario, conforme al escalafón.

Que, afirma la impugnante se ha omitido que cuenta con dos publicaciones más a las consignadas en el dictamen, y que se ha desempeñado como responsable de la sección de jurisprudencia anotada en la Revista de Derecho Procesal Penal.

Que, ello no es así, ya que se han incorporado las constancias respectivas extemporáneamente.

Que, se agravia además por haber sido calificada por el cargo de ayudante de segunda, consignándose el ascenso a ayudante de primera, sin otorgarle puntaje.

Que, no corresponde hacer lugar al agravio, toda vez que la Comisión de Selección ha realizado una valoración equiparando ambos cargos.

Que, se agravia asimismo por el puntaje obtenido por la participación en proyecto de investigación "Tratamiento de la eximente prevista en el artículo 86 del Código Penal de la Nación" conjuntamente con la colaboración en la materia Derecho Penal Parte Especial en la Universidad de Belgrano, por lo cual fue calificada con 1.5 puntos, lo que considera bajo.

Que, no corresponde hacer lugar a lo solicitado, en virtud que lo manifestado sólo evidencia un desacuerdo en los criterios y valoraciones realizadas por la Comisión de Selección, y no alcanza a conmover lo decidido.



Que, manifiesta asimismo, se ha omitido otorgarle puntaje por el cargo de Profesora adjunta en la Universidad Maimónides.

Que, al respecto, tampoco no le asiste razón dado que la constancia ha sido incorporada a su legajo fuera del plazo reglamentariamente establecido para las actualizaciones.

Que, sostiene se omitió considerar su participación en el proyecto de investigación "Atribución de responsabilidad frente al desarrollo de actividades novedosas".

Que, no corresponde valorar la participación arriba mencionada, toda vez que, al igual que los anteriores antecedentes excluidos por la Comisión de Selección, se han presentado en el legajo extemporáneamente.

Que, en el apartado Antecedentes Relevantes solicita se eleve la calificación a 4,2 en razón de dos cursos que realizó en el CEJ, y asistió a cinco jornadas o congresos además de los especificados en el dictamen. En igual sentido solicita se contemple que se ha desempeñado como responsable de la sección de jurisprudencia anotada de la Revista de Derecho Procesal Penal de Editorial Rubinzal Culzoni.

Que, dicha constancia también fue adjuntada fuera el plazo previsto para ampliar antecedentes conforme lo establece el Reglamento de Concursos.

Que, destaca la concursante se ha omitido asignarle puntaje por la beca y el cursado completo del Doctorado en Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Orientación en Derecho Privado). Que, en cuanto a éste agravio asiste razón a la impugnante, por lo cual se le otorgarán 0,80 puntos, teniendo en cuenta que se refiere al Doctorado con Orientación en Derecho Privado.

Que, afirma no se calificó la beca que obtuvo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, sin embargo, no obra constancia alguna en su legajo.

Con respecto a los planteos vinculados a la ausencia de motivación de la calificación otorgada por la realización de la entrevista personal, es dable advertir —en primer lugar— que el Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la CABA se limita en esta etapa concursal a fijar un puntaje máximo para la entrevista (40 puntos) y a enumerar una serie de pautas subjetivas que el organismo evaluador (en este caso, la Comisión de Selección) puede aplicar total o parcialmente. En este sentido, el art. 35 del Reglamento de Concursos, al referirse al objetivo de la entrevista personal, dispone que "[l]a entrevista personal con los Concursantes tiene por objeto la evaluación integral a la que se refiere el Artículo 40° de la Ley 31, que incluye las siguientes pautas: a) concepto ético profesional, b) preparación científica, c) otros antecedentes tales como: valorar su motivación para el cargo; la forma en que piensa desarrollar la función pretendida; sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento y sobre el funcionamiento del Poder Judicial; los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiere; sus planes de trabajo; su vocación democrática y republicana; y sus concepciones acerca de los derechos fundamentales y del sistema de garantías, así como cualquier otra información que, a juicio de los miembros de la Comisión de Selección, sea conveniente requerir. La Comisión, podrá evaluar a los Concursantes optando por todas o algunas de las pautas referidas precedentemente". Asimismo, el art. 42 establece que "[l]os miembros de la Comisión de Selección labrarán un acta calificando a cada Concursante mediante dictamen fundado, con una escala de hasta cuarenta (40) puntos".

Que de la normativa reseñada se desprende claramente que la calificación concedida en esta etapa del concurso no puede decidirse mediante la utilización de reglas de valoración de carácter exacto en sentido matemático. En efecto, el propio orden jurídico aplicable admitió la dificultad operativa de dicho proceso al no proporcionar fórmulas de cálculo y medición del resultado de la entrevista. En cambio, sí brinda claras directivas con respecto a quiénes deben integrar la indeterminación específica de esta etapa del procedimiento, otorgando en consecuencia un cierto margen de discrecionalidad a los operadores definidos para evaluar a los concursantes de la manera más justa y equitativa posible con el único límite de un puntaje máximo (margen de discrecionalidad que, como veremos, la propia Comisión decidió acotar).

Que al respecto, resulta oportuno recordar que “[l]os diversos aspectos que atañen a la valoración de las calidades de los candidatos, tanto en la faz profesional como personal, como hombres y mujeres formados en el derecho y en los valores de la República, deben quedar reservados, en principio, a la ponderación exclusiva y final del órgano investido con la competencia para la selección e inmunes a la injerencia judicial. Éste constituye el primer, definido y esencial límite que los jueces no pueden superar, so pena de invadir la esfera de atribuciones propia del órgano al que el constituyente encomendó de manera específica tan delicada misión, infringiendo así el mandato constitucional que pesa sobre el Poder Judicial. Sólo cuando se verifique una transgresión nítida y grave del ordenamiento jurídico o, en especial, de las disposiciones que rigen el procedimiento de selección, o en los supuestos excepcionales en los que lo decidido traduzca un ejercicio indisimulablemente irrazonable de aquellas atribuciones al punto de que se observe una parodia del concurso que exigen las normas constitucionales e infraconstitucionales en juego, se tornará viable el examen judicial de los actos impugnados al solo efecto de privarlos de validez y sin avanzar sobre las decisiones finales que en ejercicio de la atribución en examen continúan siendo función insustituible del Consejo de la Magistratura” (v. voto del Dr. Fayt in re “Carranza Latrubessé, Gustavo s/ acción de amparo”, sentencia del 23/05/2006, Fallos 329:1723). En esa misma tesitura, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo en relación con las facultades discrecionales del Consejo de la Magistratura de la Nación que “variar un orden de mérito [en un concurso de selección de magistrados] no implica per se una arbitrariedad, al estarse en un ámbito tolerable de apreciación del órgano al que el ordenamiento jurídico asigna una competencia específica” (v. Sala I in re “Scaravonati Beatriz c/ E.N. Consejo Magistratura DCTM 29/06, R335/06, Acto 22/06 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 14/02/2008).

Que en base a las circunstancias aludidas, se dictó la Resolución CSEL N° 108/2012, que contempla expresamente todas las pautas de valoración previstas en el art. 35 del Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la CABA. Precisamente, tal como surge de los considerandos del Acta N° 292/2012 de Reunión Ordinaria de la Comisión de Selección (a cuyos fundamentos remite la resolución citada), “las entrevistas se realizaron con el objeto de valorar la preparación ética, profesional y científica de cada concursante, la motivación para el desempeño del cargo al que aspira acceder, la forma en que piensa desarrollar la función pretendida, sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, el conocimiento de la jurisprudencia local, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiere, sus planes de trabajo, su vocación democrática y republicana, sus concepciones acerca de los derechos fundamentales y del sistema de garantías, así como cualquier otra información que, a juicio de los miembros de la Comisión de Selección, sea conveniente requerir”. A continuación, se explica que “los concursantes fueron interrogados, entre otros aspectos, con respecto a la jurisprudencia de primera instancia y cámaras de los tribunales locales; los fallos plenarios de las Cámaras de Apelaciones; la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia; los criterios generales de actuación del Ministerio Público; el proceso de consolidación de la autonomía de la Ciudad; la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de asuntos locales; a



diversos aspectos constitucionales y legales atinentes a la vida de la Ciudad; y a cuestiones jurídicas controvertidas y/o de actualidad". Asimismo, se estableció una escala de puntajes que alcanza el máximo de cuarenta puntos, de conformidad con lo dispuesto por el art. 42 del Reglamento citado. También se precisa que "para determinar la calificación de cada concursante en relación con cada uno de los cargos pretendidos se valoró el perfil del candidato, la impresión causada en la entrevista, si la vacante a cubrir pertenece a la primera o segunda instancia, las manifestaciones vertidas por el concursante y las diferencias funcionales y legales existentes entre los cargos del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio Público de la Defensa y los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Que por otro lado, corresponde señalar que la escala de calificaciones fue confeccionada mediante el empleo de categorías razonables de puntajes que describen acabadamente las razones por las cuales a las entrevistas realizadas se les asignó la nota contemplada en ellas. En efecto, se dispuso que: a) los concursantes calificados con 40 puntos realizaron una excelente exposición en relación con el cargo a cubrir. Las respuestas que brindaron fueron completas, claras y precisas, abordando las cuestiones planteadas de manera puntual y concreta. Durante la entrevista se desarrollaron con fluidez, soltura y solvencia conceptual, organizando adecuadamente el uso de su tiempo de exposición. Demostraron compromiso con la gestión judicial y la calidad del servicio de justicia, así como también un profundo conocimiento de la problemática del fuero al que pertenecen las vacantes a las que aspiran acceder. Satisfacen todas las pautas previstas en el art. 35 del Reglamento de Concursos; b) los concursantes calificados con 35 puntos respondieron satisfactoriamente las preguntas y comentarios formulados por los integrantes de la Comisión en relación con el cargo que aspiran ejercer, con sustento en las pautas establecidas en el art. 35 del Reglamento de Concursos. La exposición fue completa, clara y precisa. Desarrollaron los temas abordados con seguridad. Demostraron estar preparados para cumplir con las exigencias y responsabilidades del cargo a cubrir; c) los concursantes calificados con 30 puntos respondieron correctamente las preguntas de los integrantes de la Comisión con respecto al cargo a cubrir. La exposición fue completa y clara. Durante la entrevista se desarrollaron con fluidez y soltura; d) los concursantes calificados con 25 puntos realizaron una exposición aceptable con respecto al cargo aspirado. Las respuestas fueron correctas y ordenadas. Desarrollaron las cuestiones planteadas en forma general y adecuada, aunque omitieron profundizar algunos aspectos de los temas abordados; e) los concursantes calificados con 20 puntos expusieron aceptablemente a los efectos de desempeñar el cargo pretendido, pero con algunas imprecisiones. Si bien las respuestas brindadas a las preguntas y comentarios de los integrantes de la Comisión fueron correctas, no resultaron totalmente satisfactorias. Desarrollaron las cuestiones planteadas en forma general y adecuada, aunque sin la profundización suficiente; f) los concursantes calificados con 15 puntos no respondieron con precisión las preguntas de los miembros de la Comisión. La mayoría de las respuestas brindadas carecieron de profundidad. No utilizaron adecuadamente el tiempo asignado.

Que la escala descrita permite conocer con claridad la opinión que cada entrevista en particular mereció al conjunto de los miembros de la Comisión evaluadora en relación con los cargos aspirados. Por lo demás, el mecanismo utilizado de establecer categorías de puntajes limita el margen de discrecionalidad del que goza el órgano de que se trata, dado que reduce el universo de notas que pueden otorgar los Consejeros intervinientes en esta etapa del concurso. Esta situación responde a la intención manifiesta de los evaluadores de morigerar las facultades discrecionales que les reconoce el reglamento aplicable, en aras de dotar a esta evaluación la mayor transparencia e imparcialidad. Ello, sin perjuicio de resaltar que el máximo resultado establecido por el Reglamento de Concursos para la entrevista personal representa tan sólo una quinta parte del puntaje máximo total previsto para confeccionar el orden de mérito definitivo.

Que en suma, la Res. CSEL N° 108/2012 se encuentra debidamente motivada, dado que: a) enuncia en forma completa y detallada las pautas tenidas en cuenta para evaluar el rendimiento de los concursantes en la entrevista personal; b) señala las cuestiones introducidas y tratadas durante las entrevistas de manera que cada Consejero interviniente pudiera determinar en qué grado los concursantes entrevistados responden a las convicciones, aspiraciones y principios que considera necesarias para desempeñar el/los cargo/s que los postulantes aspiran a cubrir; c) establece una escala de puntajes dividida en categorías, que describen con precisión la opinión que mereció a la Comisión evaluadora el desempeño de cada entrevistado y la nota que, por consiguiente, corresponde asignarle.

Que ahora bien, tras revisar nuevamente el desempeño de la impugnante en su entrevista personal y analizar los fundamentos expresados en la impugnación, se advierte que la calificación otorgada a la concursante en cuestión resulta reducida en relación con el comportamiento demostrado por aquella en su entrevista personal, de lo que deriva la necesidad de modificar el puntaje asignado a la recurrente. En consecuencia, corresponde elevar la nota otorgada a la concursante Spósito a un total de 25 (veinticinco) puntos.

Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público emitió el dictamen nro. 164/12.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias,

**EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Art. 1º: Rechazar las impugnaciones formuladas en contra de las calificaciones asignadas en las evaluaciones escrita y oral.

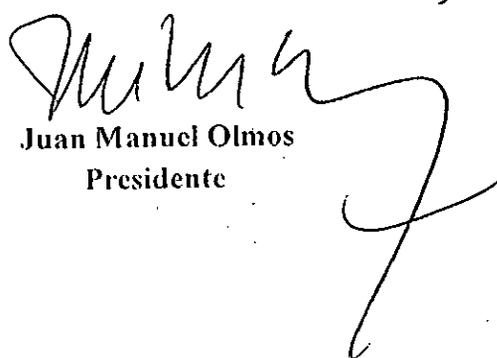
Art. 2º: Hacer lugar parcialmente la impugnación realizada al rubro antecedentes otorgando 0.80 puntos, por lo tanto el total para el rubro asciende a la suma de 39,10 (treinta y nueve con 10/100) puntos.

Art. 3º: Hacer lugar parcialmente la impugnación realizada al rubro Entrevista personal elevándole la calificación en el rubro a la suma de 25 (veinticinco) puntos.

Art. 4º: Regístrese, comuníquese a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y al correo electrónico denunciado por el presentante y, oportunamente, archívese.

RESOLUCION N° 250/2012


Gisela Candarle
Secretaria


Juan Manuel Olmos
Presidente